

por Salvador de la Plaza

(Especial para "El Nacional")

B.1758.17

Una de las consecuencias más importantes del Decreto de la Junta de Gobierno promulgando una nueva Ley de Impuesto sobre la Renta con modificaciones en la escala progresiva del impuesto complementario, es la de haber puesto término al mito del 50-50% que tantos miles de millones de bolívares ha costado a la economía nacional. Con ese Decreto, además, se ha hecho imposible que se repitiera la celebración de otro "convenio" secreto por el cual se hiciera creer a la opinión pública que Venezuela iba a percibir en lugar del 50-50% un 60-40 pero en esencia, una combinación de trécalas contables por las ~~sumas~~ ^{co} que esp^{er}aría en verdad una mayor ^{efectiva} participación de la Nación en la explotación de su petróleo. Las inadmisibles declaraciones de los directivos de las empresas, expresión de su cólera de colonialistas ensibecidos, tiene su origen en que al ejercer la Junta el derecho soberano de usar la Ley de Impuesto sobre la Renta como instrumento regulador de los beneficios de las empresas, ha escogido el camino que debe seguir Venezuela de fijar ella misma su participación, sacudiendo el lastre de los "convenios" anti-nacionales. En notas anteriores ("El Nacional" 6/12) hemos demostrado el mito del 50-50%, y a un similar mito nos hubieran conducido las conversaciones y arreglos en los que los trusts tenían fincadas sus esperanzas. Siempre habíamos ~~puesto~~ ^{puesto} en duda la existencia de un convenio mitad y mitad en la forma en que a él se refieren los verbos de los trusts, es decir, un convenio mediante el cual se obligaba a Venezuela a no ejercer su derecho a modificar el impuesto sobre la renta, a mantener una imposición limitada que aparentara una amañada mitad y mitad. Siempre habíamos creído que la sincronización de la Ley de Hidrocarburos de 1943 con la Ley de Impuesto sobre la Renta, era el origen del mito. No obstante, un autorizado columnista reclama ~~pa~~ paternidad de ese arreglo para Acción Democrática: "Venezuela es el segundo productor de petróleo, ha señalado pautas a los demás países productores en las relaciones entre el Estado y las empresas, como la del 50-50 establecida bajo el régimen de Acción Democrática (1945/48)". "Como tantas veces se ha mencionado en esta publicación -"Venezuela Democrática", órgano de AD en el exilio- el arreglo de mitad y mitad fué una forma de proceder para una situación dada mediante la cual se logró reducir la participación de la industria a un límite justo y adecuado". A confesión de partes, relevo de pruebas. Si de la sincronización de la Ley de Hidrocarburos con la escala progresiva del impuesto complementario se obtenía un 50-50% ¿qué finalidad podía tener un convenio al respecto que no fuera la renuncia por parte de la Nación a ejercer su derecho a modificar ^{esa} ~~esa~~ escala y asegurar ^{AC} una mayor participación [?] ~~para la Nación~~.

Nunca Venezuela ha percibido la mitad de los beneficios de la industria petrolera, así que las publicaciones oficiales incluso hayan afirmado que se estaba obteniendo un 60-40%. En el año de 1957 el balance de las operaciones se formuló en la siguiente forma:

| | | |
|--|-----------------|----------|
| Ingresos brutos (miles de millones) | Bs. 8.186,08 | |
| Costos, gastos operaciones | | 1.861,44 |
| Royalty (adquirido por las Cías) | | 1.512,48 |
| Varios impuestos | | 109,21 |
| Amortización, depreciación, agotamiento de pozos | | 783,39 |
| | 8.186,08 | 4.266,52 |
| | 4.266,52 | |
| Utilidad bruta | 3.919,56 | |
| <u>Impuesto renta</u> | <u>1.154,18</u> | |
| Utilidad líquida | 2.765,38 | |

De ese balance se desprende que mientras las empresas percibieron 3.548 millones de livares -la utilidad líquida más la partida amortización, depreciación, etc-, Venezuela percibió como parte en los beneficios solo 1.263 millones -impuesto sobre la renta y varios impuestos-, casi la tercera parte de lo percibido por los trusts. Ni el royalty, como ya lo hemos demostrado en otras notas, puede incluirse en los beneficios por ser capital de la Nación extraño a las operaciones de la industria, como tampoco el impuesto inicial de explotación (lo producido por el otorgamiento de las nuevas concesiones) por ser capital invertido por los trusts y por tanto incidiendo en los costos solo en la medida del pago de los correspondientes intereses y cuotas de amortización. Sin embargo, se hacía aparecer a Venezuela recibiendo ~~un~~ 60%, pero no ya de los beneficios, sino "como relación entre el Ingreso Fiscal Petrolero y la Utilidad Líquida de la Industria", nuevo sofisma para ocultar la realidad de que de los beneficios de la industria los trusts habían retirado 2.285 millones más que Venezuela, o lo que es lo mismo, que los trusts habían percibido el 69% de los beneficios Venezuela el 39%.

Los voceros de los trusts en sus escritos de desacato a nuestra Soberanía, insisten que "se ha quebrantado el principio de la igual participación entre la nación y las compañías petroleras". "El convenio de participación igual en los beneficios de la industria petrolera etc". Pero, ¿qué entienden estos señores y los "técnicos" criollos a su servicio por participación igual en los BENEFICIOS de la industria petrolera? No se necesita ser contable experto para apreciar que beneficio de una empresa es lo que resulta de deducir de los ingresos brutos los diversos gastos, amortizaciones, etc, sin que pueda considerarse beneficio, por ejemplo el que con el 16-2/3 de nuestro petróleo (el royalty) construyamos carreteras, escuela etc, pues esas no son mejoras provenientes de "beneficios" de la industria, sino consecuencia del empleo que hemos dado a nuestro petróleo, a la parte de esa inmensa riqueza que tenemos en el sub-suelo y que no se la debemos a los trusts. Lo lamentable es que no seamos nosotros mismos quienes las estemos extrayendo, como lo está haciendo México, Brasil, por que si fuera así toda esa riqueza beneficiaría a la colectividad venezolana. Y tan lo comprende de esa manera el pueblo venezolano, que al mismo tiempo que plantea una mayor participación en la explotación del petróleo -política de relaciones entre el Estado y las empresas- exige y reclama la explotación, refino, ^{con} distribución directa del petróleo por el Estado. Son dos reivindicaciones concomitantes.

Por virtud del Decreto de la Junta de Gobierno, nos acercaremos a una participación efectiva del 50-50% de los BENEFICIOS. Pero para que ello sea una realidad, deben tomarse una serie de medidas de fiscalización para evitar las violaciones de nuestras leyes por los trusts. Por ejemplo: en la partida de amortización, depreciación, agotamiento a simple vista se observa la irregularidad, ya que los 783 millones deducidos en 1957 representan el 9-1/2% del capital neto invertido, lo que seguramente se debe, por ausencia de control, a que las maquinarias son depreciadas varias veces, así como varias veces amortizados los mismos capitales. Por otra parte, si la concesión da el derecho a explotar el 83-1/3 de cada 100 barriles extraídos, ¿por qué se permite a los trusts deducir una partida de agotamiento de pozos con la cual están burlando la imposición y falseando la declaración? Es Venezuela y no los trusts la que debe decidir sobre su participación, habida cuenta del propio interés del país en asegurar un normal desarrollo de las empresas, sin dejarse chantajear por amenazas. Demostrar que sabemos a donde vamos y lo que queremos, y mantener con firmeza las decisiones que se tomen, es el mejor lenguaje de respuesta a los trusts.